**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 29/2003**

SERVIDOR PÚBLICO:

**México, Distrito Federal a siete de octubre de
dos mil cinco.**

Vistos para emitir resolución definitiva en el
procedimiento de responsabilidad administrativa
29/2003, y;

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Mediante oficio CSCJN-DGCI-
DRP/1227/2003 de diecinueve de agosto de dos mil
tres, el Director de Registro Patrimonial de la
entonces Contraloría de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación hizo del conocimiento de la Directora de
Responsabilidades de la citada Contraloría, la
presunta infracción en que incurrió el servidor público
***** a lo dispuesto en el artículo 47, fracción
XVIII, de la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, en virtud de que de la revisión de
las declaraciones patrimoniales presentadas en
relación con los ejercicios de mil novecientos noventa

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 29/2003.**

y cinco a dos mil, se desprenden irregularidades en cuanto a su evolución patrimonial.

SEGUNDO. Por acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil cuatro, la entonces Contraloría de este Alto Tribunal determinó que por lo que respecta a las irregularidades detectadas en la evolución patrimonial de ***** por los ejercicios de mil novecientos noventa y cinco a mil novecientos noventa y nueve, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, incluso a la fecha de presentación de la queja, es decir al veintiuno de agosto de dos mil tres, habían prescrito las facultades para sancionar al servidor público en cuestión, de ahí que en relación con las probables faltas cometidas en las declaraciones relativas a dichos ejercicios no se inició el procedimiento disciplinario correspondiente; en cambio, por lo que respecta a la posible conducta infractora realizada en el ejercicio de dos mil, se determinó iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa; se registró con el número de expediente **29/2003**; el diecinueve de febrero de dos mil cuatro se notificó personalmente al servidor público del procedimiento administrativo iniciado en su contra y, con fundamento en el artículo 134, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

Federación, se le requirió para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación de cuenta, formulara un informe escrito sobre todos y cada uno de los hechos que se le imputaron y ofreciera las probanzas que en su defensa tuviera.

TERCERO. Mediante escrito presentado en la entonces Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veinticuatro de febrero de dos mil cuatro, ***** rindió el informe que se le requirió sobre los hechos que se le imputaron y ofreció como pruebas de su parte diversas documentales.

CUARTO. En proveído de veinticinco de febrero de dos mil cuatro, el entonces Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibido en tiempo y forma el informe rendido por *****, así como por ofrecidas y admitidas, por su propia y especial naturaleza, las pruebas a las que éste hizo referencia.

QUINTO. El dieciséis de marzo de dos mil cuatro, la entonces Contraloría de este Alto Tribunal emitió dictamen con los puntos resolutivos siguientes:

“PRIMERO. ** es responsable de la infracción prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplimiento de la obligación señalada en el artículo 47, fracción XVIII, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, conforme lo expuesto en el sexto considerando de este dictamen.***

SEGUNDO. Con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral 80 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se propone sancionar a ** con la suspensión de tres días del cargo que viene desempeñando, de acuerdo con lo expuesto en el considerando séptimo de este dictamen.***

TERCERO. Notifíquese personalmente a ** y una vez cumplido ello, envíese el procedimiento administrativo de responsabilidades en que se actúa a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Suprema Corte de***

***Justicia de la Nación para los efectos
precisados en la parte final del último
considerando.”***

Las consideraciones en que se sustenta el dictamen, en síntesis, son las siguientes:

I. La infracción atribuida a ***** consiste en no haber presentado con veracidad su declaración anual de modificación patrimonial respecto del ejercicio de dos mil, pues al ocupar el cargo de coordinador de asesores, adscrito a la Dirección General de Informática de este Alto Tribunal, se encontraba obligado a presentar dicha declaración, no sólo en tiempo sino también con veracidad, por así estar establecido en el artículo 47, fracción XVIII, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente en aquella época.

II. ***** es responsable administrativamente de la conducta que se le atribuye por las razones siguientes:

a) De acuerdo con lo establecido en el punto Quinto, numeral 7, del Acuerdo General Plenario 6/1996, de cinco de diciembre de mil novecientos noventa y seis, los coordinadores de asesores tienen

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 29/2003.**

obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a que se inicia o se concluye el cargo o durante el mes de mayo de cada año tratándose de la de modificación de situación patrimonial, y al declarar deben hacerlo con veracidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 47, fracción XVIII, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

b) Lo anterior es así, toda vez que en el caso examinado, entre otros de los antecedentes que obran en el expediente, se advierte lo siguiente:

1. De acuerdo con lo asentado por ***** en la declaración anual de situación patrimonial correspondiente al ejercicio de dos mil que se acompañó a la queja presentada en su contra (foja 72), sin que hubiera sido objetada por aquél al presentar el informe que se le solicitó con motivo del presente procedimiento, tiene el carácter de servidor público de este Alto Tribunal con el cargo de coordinador de asesores adscrito a la Dirección General de Informática.

2. De la copia simple de la declaración anual de modificación patrimonial, descrita con anterioridad, se desprende que fue presentada el treinta de mayo de

dos mil uno en la Dirección de Registro Patrimonial de la Contraloría de este Alto Tribunal, lo que se corrobora con la copia simple del acuse de recibo correspondiente expedido por el titular de la mencionada Dirección, que también se encuentra agregada en autos (foja 82). De tal manera, se concluye que ***** presentó de manera oportuna la declaración anual de modificación patrimonial del ejercicio dos mil.

3. De lo manifestado en la declaración anual señalada, se concluye que no cumple con el requisito de veracidad, pues los datos declarados no se adecuan a la realidad, tal como se desprende del análisis efectuado por la Dirección de Registro Patrimonial y se corrobora con el contenido de las copias fotostáticas simples de dicha declaración que obran en autos (fojas 72 a 82).

El total de los ingresos señalados en cantidad de ***** no corresponde al total de los egresos declarados en el mismo ejercicio, es decir, *****.

c) Por tanto, ***** sí cometió la infracción administrativa que se le atribuye al no conducirse con verdad al presentar su declaración de situación patrimonial relativa al ejercicio dos mil, por lo que se

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 29/2003.**

estima que es responsable de infringir lo dispuesto en el artículo 47, fracción XVIII, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En el dictamen se estableció que no eran obstáculo para arribar a la conclusión anterior, las defensas esgrimidas a su favor por *****, ni las pruebas por él ofrecidas, pues con ellas no se desvirtúa lo que de autos se advierte. Por ende, se concluye que no cumplió con la obligación de declarar con veracidad su situación patrimonial.

Así, al haber encontrado responsable administrativamente a ***** de la falta atribuida, en el dictamen se propone sancionarlo con suspensión por el término de tres días del cargo que viene desempeñando, con fundamento en lo previsto en el artículo 80 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

SEXTO. El referido dictamen se notificó personalmente a ***** el veintitrés de marzo de dos mil cuatro y en esa misma fecha, el entonces Contralor de este Alto Tribunal acordó remitir a la Secretaría Ejecutiva de Asuntos Jurídicos el expediente de responsabilidad administrativa **29/2003**. El seis de abril de dos mil cuatro, el

mencionado servidor público ejerció el derecho que le confiere el artículo tercero, fracción XIV, del Acuerdo General de Administración II/2003.

SÉPTIMO. Mediante oficios DGAJ/1646/2004 y DGAJ/1647/2004, dirigidos, respectivamente, a la entonces Directora General de Desarrollo Humano y a la Directora General de Presupuesto y Contabilidad, ambas de este Alto Tribunal, la entonces Dirección General de Asuntos Jurídicos solicitó informaran cuáles fueron los ingresos que por concepto de estímulos recibió ***** en el año dos mil y, asimismo, si las cantidades correspondientes se encontraban previstas en la constancia de retenciones por salarios y conceptos asimilados que el mencionado servidor público presentó junto con su declaración de modificación patrimonial de ese año.

Las respuestas a dichos oficios se recibieron en la entonces Dirección General de Asuntos Jurídicos los días veintidós y veintiséis de noviembre de dos mil cuatro.

OCTAVO. El seis de octubre de dos mil cinco, la Secretaría Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este Alto Tribunal emitió opinión en el sentido de que el

citado servidor público es responsable administrativamente de la falta materia de este procedimiento de responsabilidad administrativa, por lo que con fundamento en el artículo 45, fracción II, del Acuerdo Plenario 9/2005 de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se le debe imponer como sanción una amonestación privada.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver en definitiva el presente procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en contra de *****, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 133, fracción II, en relación con el 14, fracción XXI, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues se trata de un servidor público de este Alto Tribunal al que se le atribuye una conducta infractora que no está catalogada como grave.

SEGUNDO. Antes de abordar el estudio del referido dictamen y del procedimiento que le precedió, resulta conveniente precisar que tal como lo determinó el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis

55/2004-PL el veintitrés de agosto de dos mil cinco, este procedimiento debe substanciarse conforme a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Penales que, en términos de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, es el ordenamiento que debe aplicarse a las cuestiones relativas no previstas en esa Ley, tratándose de hechos acontecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 74/2001 de la Segunda Sala, cuyo rubro, texto y datos de identificación son los siguientes:

“RESPONSABILIDAD. AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, POLICÍAS JUDICIALES Y PERITOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y, EN SU CASO, EL CÓDIGO PENAL FEDERAL, SON APLICABLES SUPLETORIAMENTE A LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE DICHA PROCURADURÍA. En los artículos del 50 al 55 de la citada ley orgánica se regula un específico sistema de responsabilidades, complementario del sistema general previsto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, mediante el cual se establecen obligaciones a cargo de los agentes del

Ministerio Público Federal, de los policías judiciales y de los peritos de la Procuraduría General de la República, a fin de salvaguardar la legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez en el desempeño de su función, así como las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran y los procedimientos y las autoridades para aplicarlas, ello en atención a la especial naturaleza de las funciones desempeñadas por esos servidores públicos, que constituye una reglamentación de lo dispuesto en el título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente de su artículo 113. De esta manera, para colmar el vacío legislativo que se advierte en las normas que integran aquel contexto normativo, deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 45 del último ordenamiento citado y acudir a lo establecido en el Código Federal de Procedimientos Penales y, en lo conducente, a lo señalado en el Código Penal Federal, normas supletorias en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la Federación, en virtud de que si la finalidad de los procedimientos previstos en la señalada ley orgánica es determinar la responsabilidad administrativa de los referidos funcionarios, para lo cual es necesario conocer la verdad real de los actos u omisiones que se les atribuyan, ese objetivo es congruente y acorde con el sistema previsto por el referido código procesal penal que, alejado de las formalidades y solemnidades que rigen

en otras materias, pretende por encima de las actitudes procesales de las partes, indagar sobre la realidad de los eventos materia de examen.”

(Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, Diciembre de 2001, página 278).

TERCERO. Por principio, cabe señalar que del análisis del expediente relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa **29/2003**, se advierte que se siguieron las respectivas formalidades del procedimiento, en tanto que, con motivo del seguimiento de la evolución de situación patrimonial de los servidores públicos: **1.** El Director de Registro Patrimonial informó a la Directora de Responsabilidades sobre la posible infracción en que incurrió *********, es decir, denunció ante el órgano competente de la entonces Contraloría la comisión de una falta administrativa con lo que se dio inicio al procedimiento. **2.** El entonces Contralor de este Alto Tribunal acordó y registró el procedimiento sobre la probable infracción y otorgó un plazo de cinco días hábiles para que ********* rindiera su informe respecto de los hechos que se le imputaron y ofreciera las pruebas relacionadas con su defensa, para lo cual, en respeto a la garantía de audiencia, le hizo saber las causas de responsabilidad que se le imputaban. **3.** El servidor público rindió el informe

solicitado y ofreció pruebas en su defensa. **4.** El entonces Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el dictamen correspondiente y lo remitió a la entonces Dirección General de Asuntos Jurídicos. **5.** Se otorgó el plazo para que ***** manifestara lo que a su derecho conviniera en términos de lo previsto en el artículo tercero, fracción XIV, párrafos segundo, tercero y cuarto, del Acuerdo General de Administración II/2003. **6.** Mediante escrito presentado el seis de abril de dos mil cuatro en la entonces Dirección General de Asuntos Jurídicos, ***** ejerció el derecho que se le otorga en términos de lo dispuesto en el numeral que antecede.

CUARTO. El presente procedimiento de responsabilidad administrativa se inició con la denuncia presentada por el Director de Registro Patrimonial en contra de ***** y, una vez desarrollado el procedimiento respectivo, la entonces Contraloría de este Alto Tribunal estimó que dicho servidor público es responsable de la infracción administrativa que se le atribuyó en la denuncia antes referida. Es decir, la mencionada Contraloría consideró que el servidor público en cuestión es responsable conforme a lo dispuesto en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplimiento de la obligación

señalada en el artículo 47, fracción XVIII, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y punto QUINTO, numeral 7, del Acuerdo Plenario 6/1996.

De tal manera, para estar en aptitud legal de emitir una opinión sobre si ***** omitió cumplir alguna de sus obligaciones relacionadas con el registro patrimonial, es imprescindible tener presente el contenido de los preceptos que se estimaron violados a partir de la referida denuncia.

Así, conviene precisar que los artículos 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 47, fracción XVIII, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, son del tenor siguiente:

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

***“ARTÍCULO 131.** Serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación:*

...XI. Las previstas en el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los

Servidores Públicos, siempre que no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional.

XII. *Las demás que determine la ley.”*

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

“ARTÍCULO 47. *Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas:*

(...) XVIII. Presentar con oportunidad y veracidad, las declaraciones de situación patrimonial, en los términos establecidos por esta ley;(…)”

Asimismo, en el numeral 7 del punto QUINTO, del Acuerdo General Plenario 6/1996, se señala:

“QUINTO. *Los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligados a presentar declaraciones sobre situación patrimonial son:*

(...) 7. Coordinadores de Asesores (...)”

De lo dispuesto en los artículos que anteceden se desprende la obligación a cargo de los servidores públicos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que tengan nombramiento de Coordinadores de Asesores, de presentar declaración de situación patrimonial con oportunidad y veracidad.

QUINTO. En primer término, cabe precisar que no obstante que en el presente caso no existió controversia respecto de si ***** se encontraba obligado a presentar su declaración de modificación patrimonial en el cargo de Coordinador de Asesores que ocupa, pues el procedimiento de responsabilidad administrativa fue seguido en su contra por no haber cumplido con el requisito de presentar con veracidad su declaración de modificación patrimonial, se estima necesario pronunciarse al respecto, toda vez que, de

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 29/2003.**

no existir tal obligación para los servidores públicos de su categoría, sería inexistente la falta administrativa que se le atribuyó.

Ahora bien, de las constancias probatorias allegadas al sumario, se arriba al convencimiento de que dicho servidor público sí tenía la obligación de presentar una declaración patrimonial de tal naturaleza, lo que se desprende de la copia de la declaración inicial y por conclusión de encargo, presentada el tres de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (fojas 16 a 21 del expediente) en la que en el renglón correspondiente a “encargo que desempeña” se advierte que el propio ***** expresamente señala “Coordinador de Asesores” y en el relativo a “encargo que concluye” señala “Director de Área” y de las copias de modificación patrimonial correspondientes a los años de mil novecientos noventa y cinco, mil novecientos noventa y seis, mil novecientos noventa y siete, mil novecientos noventa y ocho, mil novecientos noventa y nueve y dos mil (fojas 22 a 82 del expediente) en las que reiteradamente señala en el rubro correspondiente a “encargo que desempeña”, “Coordinador de Asesores”, adscrito a la Dirección General de Informática, cargo respecto del cual, en términos de lo previsto en el numeral 7 del punto quinto, del Acuerdo

General Plenario 6/1996, los servidores públicos que lo desempeñan se encuentran obligados a su presentación; por tanto, ante la clara manifestación por parte de ***** y al no existir la objeción de su parte respecto de que estaba obligado a su presentación, es factible abordar el análisis de la falta atribuida, toda vez que de las constancias allegadas al sumario no se advierte prueba alguna que haga suponer lo contrario.

SEXTO. En el caso de ***** se le atribuye como infracción administrativa haber presentado su declaración de modificación patrimonial en el cargo de Coordinador de Asesores, adscrito a la Dirección General de Informática, correspondiente al año dos mil, sin cumplir con el requisito de veracidad, por lo que es menester analizar las constancias de autos para determinar si su conducta se ajusta al supuesto de responsabilidad administrativa y, si derivado de ello, ha lugar a imponerle alguna sanción o, en su defecto, existen causas que justifiquen su actuación y deba relevársele de la misma.

Las pruebas documentales que obran en el expediente de responsabilidad administrativa 29/2003 son, entre otras:

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 29/2003.**

a) Oficio CSCJN-DGCI-DRP/1227/2003, del Director de Registro Patrimonial dirigido a la Directora de Responsabilidades, del que se desprende que en las declaraciones de situación patrimonial presentadas por ***** se observaron irregularidades en cuanto a su evolución patrimonial y que se le envió oficio de Aclaración de Observaciones a dicho servidor público el siete de agosto de dos mil uno, al que hizo caso omiso.

b) Documento denominado “Relación de puntos a comentar con el licenciado ***** relativos a las declaraciones de situación patrimonial presentadas ante esta Contraloría”, en el que se advierte que en relación con la declaración anual de dos mil, presentada el treinta de mayo de dos mil uno, se señala que el servidor público declara ingresos por ***** y aplicaciones por un monto de *****, y se hace la aclaración de que considerando el movimiento de sus cuentas bancarias, se excede en sus gastos por un importe de **cincuenta y seis mil trescientos dos pesos**; además de que se requiere aclaración del origen de los estímulos que el servidor público menciona en el rubro de observaciones por un monto total de **ciento cincuenta y dos mil seiscientos cincuenta y cinco pesos**.

c) Copia de la declaración de modificación patrimonial correspondiente al año dos mil, presentada el treinta de mayo de dos mil uno por ***** , de la cual, en lo que interesa, se desprende lo siguiente:

1. En el rubro 14, relativo a **“INGRESOS NETOS DEL DECLARANTE, CÓNYUGE Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS DURANTE EL 2000”** se señaló como total la cantidad de *****.

2. En el rubro 15, relativo a **“APLICACIÓN DE RECURSOS DEL DECLARANTE, CÓNYUGE Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS”** manifestó la cantidad total de *****.

3. En el rubro 16, correspondiente a **“DECREMENTO AL PATRIMONIO DEL DECLARANTE, CÓNYUGE Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS”** manifestó donaciones por ***** y en ese mismo numeral, en el renglón relativo a **“TOTAL DE APLICACIÓN DE RECURSOS (TOTAL RUBRO 15 Y 16)”** señaló la cantidad de *****.

De los señalados elementos de convicción cuyo contenido no fue objetado por ***** al rendir el informe que se le solicitó con motivo del presente

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 29/2003.**

procedimiento de responsabilidad, se arriba al convencimiento de que:

- ***** en el año dos mil, ejerció el cargo de coordinador de asesores, adscrito a la entonces Dirección General de Informática, nombramiento respecto del cual los servidores públicos que lo ejerzan se encuentran obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial en términos de lo que se prevé en el punto quinto, numeral 7, del Acuerdo Plenario 6/1996, debiendo hacerlo no sólo en tiempo, sino también con veracidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47, fracción XVIII, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente en aquella época.

- ***** al presentar su declaración de modificación de situación patrimonial relativa al año dos mil, declaró en el rubro 14, D, como total de ingresos anuales del declarante, cónyuge y/o dependientes económicos la cantidad de *****, mientras que en el rubro relativo al total de aplicación de recursos del declarante, cónyuge y/o

dependientes económicos manifestó la cantidad de *****. Es decir, conforme a lo declarado en los renglones señalados existe una diferencia de **\$478,349.00 (cuatrocientos setenta y ocho mil trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.)** entre los ingresos percibidos y las erogaciones realizadas en ese periodo.

- ***** hizo caso omiso al oficio que se le envió para Aclaración de Observaciones el siete de agosto de dos mil uno.

Ahora bien, el hecho de que en una declaración de situación patrimonial el monto total de ingresos y de egresos reportados no sea coincidente es revelador de que no se ha declarado con veracidad, bien sea en el rubro de ingresos o en el de egresos, ya que del análisis de los subrubros contenidos en aquéllos se advierte que mediante los mismos se tiende a cuantificar todos y cada uno de los ingresos tanto propios como del cónyuge o dependientes económicos, en tanto que en los rubros denominados “aplicación de recursos” y “decremento al patrimonio” se contemplan subrubros que permiten conocer a plenitud el destino que se da en el año a

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 29/2003.**

los ingresos respectivos, contemplándose en ellos las adquisiciones de todo tipo, las inversiones, los gastos de manutención en general e, incluso, donaciones, robos y siniestros.

De tal suerte, se pone de manifiesto que ***** con su conducta faltó a su deber de presentar con veracidad la declaración de situación patrimonial correspondiente al año dos mil; violentando con ello lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

No pasa inadvertido el hecho de que de lo manifestado por ***** en el apartado de *observaciones* de la declaración de que se trata (hoja 78 del expediente), se desprende que erró al determinar el total de adquisiciones y/o remodelaciones en bienes inmuebles de su propiedad, de la de su cónyuge y/o de la de sus dependientes económicos.

En efecto, señala en dicho apartado de observaciones que: ***“se adquirió una casa con valor de ***** y gastos de escrituración de *****; con un total de *****; obteniéndose un crédito con ***** por el valor de *****; en la***

declaración del año anterior se hizo la observación de un anticipo por ***, como anticipo de la venta de la casa.- - - Asimismo, en el periodo de marzo-septiembre del año pasado se realizaron adecuaciones a la casa de acuerdo a los siguientes rubros (...) total *****.”**

Por su parte, en el apartado 17, relativo a adquisiciones y/o remodelaciones en bienes inmuebles del declarante, cónyuge y/o dependientes económicos realizada durante 2000, señala que adquirió una casa a crédito y que el valor de la operación fue de *****; que además, se hicieron remodelaciones a ese mismo inmueble por la cantidad de ***** , lo que le llevó a concluir que el total de lo erogado por esos conceptos ascendía a ***** .

Es decir, para determinar el total de sus adquisiciones tomó en cuenta y declaró el valor total del inmueble, incluyendo el anticipo de ***** erogado en el año de mil novecientos noventa y nueve, y no únicamente la parte que cubrió en el periodo que estaba declarando, y a esta cantidad le sumó la correspondiente a la remodelación; así, es posible concluir conforme a sus propias manifestaciones, que el total señalado por concepto

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 29/2003.**

de “Adquisiciones y/o remodelaciones en bienes inmuebles del declarante, cónyuge y/o dependientes económicos realizados durante el 2000” **rebasa por ***** el valor de la operación realizada en el año dos mil.**

Sin embargo, aun corrigiendo esa anomalía y llevando a cabo los ajustes correspondientes, en la declaración (***** aplicación real de recursos) y (***** ingresos declarados = *****), sigue apareciendo una diferencia de **\$128,352.00 (ciento veintiocho mil trescientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.)** entre las erogaciones efectuadas y los ingresos percibidos, que equivale a la cantidad determinada por la entonces Contraloría de este Alto Tribunal en el dictamen emitido con motivo del procedimiento seguido en contra de *****.

Por otra parte, se advierte también que ***** declaró en el renglón relativo a otros ingresos anuales netos del declarante (hoja 73 del expediente) la cantidad de ***** que se compone por beneficios, rendimientos, intereses, etcétera, en cantidad de ***** y por otros (arrendamientos, regalías, sorteos, concursos, donaciones, herencias o legados) en cantidad de ***** al especificar el origen de dichos ingresos en el apartado de observaciones de su declaración, manifestó: **“En relación al rubro 14**

**inciso II.2 se obtuvieron los sigtes (sic) intereses
cuenta ***** Respecto al inciso II.14 del rubro
14, se obtuvieron los siguientes estímulos:
XXXXXXX correspondiente al año 99 (cheque
entregado en enero 2000)- - ***** Año 2000 - -
- total ***** .”**

Como deriva de lo anterior, ***** declaró haber recibido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación **estímulos** por la cantidad total de ***** , además de los ingresos obtenidos por sueldos, honorarios, gratificaciones y otras prestaciones por su cargo público.

En relación con los referidos estímulos cabe señalar que los mismos carecen de sustento alguno ya que como se advierte del oficio DGDH-DN-11-806-2004 del diecinueve de noviembre de dos mil cuatro, rubricado por la entonces Directora General de Desarrollo Humano, que obra en el expediente relativo a esta opinión, el estímulo, por ***** se encuentra incluido en el monto del subrubro 14.I denominado “sueldos, honorarios, gratificaciones y otras prestaciones laborales por su cargo público”, por lo que dicho estímulo no puede válidamente cuantificarse doblemente dentro del rubro de ingresos

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 29/2003.**

y, por ende, el monto de ***** debe reducirse en *****.

En abono a lo anterior, resulta innecesario pronunciarse en relación con la situación de los otros ***** declarados como estímulo, pues con independencia de lo correcto de ello, el incumplimiento de la obligación prevista en la fracción XVIII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se acredita plenamente con lo manifestado respecto del primero de esos estímulos, siendo irrelevante que el error sea por ***** o por *****.

En ese orden de ideas queda plenamente acreditado que ***** incurrió en diversas imprecisiones al rendir su declaración de modificación patrimonial correspondiente al ejercicio de dos mil ya que, por una parte, del simple cotejo de los ingresos reportados respecto de la aplicación de los mismos se advierte una diferencia de **\$128,352.00 ciento veintiocho mil trescientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.**), descontando el error por declarar como egresos el anticipo por ***** que erogó en el año de mil novecientos noventa y nueve y, por otra parte, manifestó un ingreso por ***** por concepto de

estímulo que ya se encontraba reflejado en un diverso subrubro del rubro de ingresos.

Por tanto, ***** se ubicó en la hipótesis de responsabilidad prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación por incumplir la obligación señalada en el artículo 47, fracción XVIII, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y en el punto quinto, numeral 7, del Acuerdo Plenario 6/1996.

En consecuencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al haberse comprobado la existencia de la infracción administrativa que se atribuyó a ***** en la denuncia presentada por la Dirección de Registro Patrimonial, es menester establecer si el servidor público de que se trata es responsable de la conducta que se le atribuye.

Por lo anterior, se hace necesario analizar lo que ***** manifestó en su defensa, al rendir el informe que le fuera solicitado por la entonces Contraloría de este Alto Tribunal, con motivo del presente procedimiento de responsabilidad

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 29/2003.**

administrativa. En aquella ocasión manifestó en síntesis, lo siguiente:

a) Bajo protesta de decir verdad, aseguró que no se condujo con falsedad al realizar sus declaraciones, sino que únicamente pudieran existir imprecisiones involuntarias.

b) Las actividades propias que realiza en este Alto Tribunal le hacen ajeno al manejo de recursos, tanto financieros como materiales, además de que no tiene contacto alguno con proveedores.

c) Existió error al declarar duplicidad en gastos; realizó el pago con tarjeta de crédito de los siguientes rubros: alimentación, vestido, material y accesorios.

d) Los gastos debieron registrarse de manera diversa, lo que daría lugar a que la declaración corregida quedara de la siguiente forma:

Ingresos	*****
Intereses	*****
Estímulos	*****
Subtotal	*****
Movimientos en bancos	*****

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 29/2003.**

Subtotal	*****
Préstamo casa	*****
Subtotal	*****
Pago de casa	*****
Subtotal	*****
Remodelación	*****
Subtotal	*****
Bienes	*****
Subtotal	*****
Pagos	*****
Subtotal	*****
Manutención	*****
Subtotal	*****
Préstamo Bancomer	*****
Subtotal	*****
Donaciones	*****
Total	*****

e) El origen de los estímulos mencionados en el rubro de observaciones se recibió en los primeros días de enero de dos mil, un cheque por la cantidad de setenta mil pesos, a través del titular de la Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis, como bono correspondiente al año mil novecientos noventa y nueve, por las labores desempeñadas en dicha Coordinación; en noviembre de ese mismo año, recibió otro cheque por

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 29/2003.**

la cantidad de ochenta y dos mil seiscientos cincuenta y cinco pesos, como bono por las labores desempeñadas en el año dos mil; ambos cheques fueron depositados en la cuenta de cheques
*****.

La entonces Contraloría de este Alto Tribunal, al emitir su dictamen, analizó lo manifestado por ***** y concluyó que no era suficiente para desvirtuar la infracción administrativa que se le atribuye, por tanto, dictaminó que lo conducente era sancionarlo.

Posteriormente, en el escrito recibido en la entonces Dirección General de Asuntos Jurídicos, el veinticuatro de marzo de dos mil cuatro, ***** substancialmente aduce lo siguiente:

1. En términos de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos han prescrito las facultades para sancionarle por la conducta que se le atribuye. Si la responsabilidad en que incurrió se presentó el treinta de mayo de dos mil uno, el plazo para la prescripción inició el treinta y uno de mayo siguiente y concluyó el treinta y uno de mayo de dos mil dos, por lo que si el procedimiento relativo se inició el diecisiete de febrero

de dos mil cuatro, resulta indudable que transcurrió en exceso el plazo de un año a que se refiere la fracción I del precepto en cita.

No puede existir duda en cuanto a la interpretación y aplicación al caso de la referida fracción I, dado que la falta que se le imputa no es grave y carece de cuantía, al no haber ocasionado daños y perjuicios a la Institución, como se reconoce en el considerando séptimo del dictamen emitido por la entonces Contraloría de este Alto Tribunal.

Invoca en apoyo de sus manifestaciones criterios sostenidos por diversos Tribunales Colegiados de Circuito.

2. El dictamen del entonces Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que se determina que es responsable de la infracción carece de la debida fundamentación y motivación y por ende, es violatorio de las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales.

La infracción administrativa que se le atribuye se sustenta en lo dispuesto en los artículos 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo que se establece en el

artículo 47, fracción XVIII, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y se aduce que en la declaración anual de modificación patrimonial respecto del año dos mil, no se condujo con verdad, lo que es inexacto, ya que como lo manifestó oportunamente y bajo protesta de decir verdad ante la entonces Contraloría de este Alto Tribunal, lo que en realidad ocurrió fue que incurrió en imprecisiones involuntarias y aclaró que cometió el error de declarar duplicidad en los gastos, al haber realizado diversos pagos con su tarjeta de crédito.

La aclaración y la aceptación del error en que incurrió ponen en evidencia que en ningún momento pretendió faltar a la verdad, por lo que corresponde a la entonces Contraloría demostrar su afirmación en el sentido de que sí lo hizo.

Además, agrega, el valor de la verdad que se pretende con la presentación de las declaraciones patrimoniales debe entenderse en función de los fines que persigue la ley relativa, que pueden observarse en la Exposición de Motivos del dos de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y que son prevenir y castigar la corrupción en el servicio público, así como garantizar su buena prestación; esto es, la actividad primaria del Estado debe dirigirse a la prevención de

conductas que puedan generar corrupción o una indebida prestación del servicio público, pero en ninguna forma se establece una persecución *per se* del servidor público, sino únicamente en los casos en que con su conducta se afecte a los intereses públicos fundamentales y a su buen despacho o que con sus actos u omisiones se afecten los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, que orientan a la Administración Pública.

Reitera, el simple e inofensivo error en que incurrió en la elaboración de la declaración anual de modificación patrimonial no puede entenderse como un atentado a los principios rectores del ordenamiento que regula las responsabilidades que amerite una sanción.

Concluye esta parte de sus defensas manifestando que con su conducta no hubo dolo ni el ánimo de mentir, no pretendió lesionar función alguna que haya tenido encomendada u ocultar algún ingreso indebido a su patrimonio, sino que incurrió en un simple error en el método de elaboración del formato de declaración, máxime que en el ámbito de sus actividades no realiza manejo alguno de bienes y recursos, ni interviene en licitaciones, ni hace nombramientos de funcionarios, sino simple y

sencillamente presta servicios de programación, asesoría y mantenimiento en cuanto a sistemas informáticos, lo que no podría verse afectado por la existencia de un error en el llenado de la declaración referida.

3. La entonces Contraloría de este Alto Tribunal para hacer la propuesta de sanción se basa en el artículo 80 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas (sic) en el que se dispone: *“...El servidor público que en su declaración de situación patrimonial faltare a la verdad en relación con lo que es obligatorio manifestar en términos de esta Ley, será suspendido, y cuando por su importancia lo amerite, destituido e inhabilitado de tres meses a tres años.”* Dicho precepto es contrario a lo que se ordena en el artículo 113 constitucional, toda vez que en él se establece que las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos determinarán entre otras cosas: *“...las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran... Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios*

patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.” El mencionado artículo 80 ante la hipótesis de que un servidor público en su declaración de situación patrimonial falte a la verdad en relación con lo que le es obligatorio manifestar en términos de esa ley, establece tres tipos de sanciones, una **“será suspendido”** y separado con una coma y la conjunción **“y”** continúa: **“...cuando por su importancia lo amerite,** destituido e inhabilitado de tres meses a tres años.”

Del análisis del supuesto normativo se advierte que, en primer lugar señala que la sanción es a quien falte a la verdad “en relación con lo que le es obligatorio manifestar”, esta falta de certeza desaparecería si en el dictamen que se combate se precisara por la entonces Contraloría, además de la imprecisión o error en que incurrió, qué era obligatorio manifestar y no lo hizo, para que su conducta se ubicara en un supuesto sancionable, de conformidad con el artículo 82 de la ley de la materia, en el que se establece: *“La Secretaría expedirá las normas y los formatos bajo los cuales el servidor público deberá presentar la declaración de situación patrimonial, así*

como los manuales e instructivos que indicarán lo que es obligatorio declarar.”

La omisión aludida demuestra la falta de fundamentación y de motivación debidas, en su perjuicio en la resolución de que se trata.

Por otra parte, en relación con la sanción “***será suspendido***” la norma incurre en un vicio de inconstitucionalidad en razón de que no se precisa de qué será suspendido ni da la posibilidad a la autoridad de aplicarla en función de algún parámetro preciso, como sí lo hace cuando se refiere a la destitución o a la inhabilitación, ya que en el caso de estas últimas establece el rango entre tres meses y tres años.

Lo anterior se refuerza si se considera que en ningún artículo se prevé la facultad de la autoridad administrativa para establecer a su arbitrio la imposición de sanciones en materia de suspensión, ni la facultad para interpretar en el orden administrativo las leyes aplicables.

En este caso, la entonces Contraloría viola el anterior básico principio de derecho ya que en ningún momento el citado artículo 80 le faculta para proponer

que, tratándose de la suspensión, se pueda decretar por un periodo de tres días.

4. Continúa señalando que si la sanción de mérito no existe, por no encontrarse debidamente reglamentada, resulta improcedente su aplicación en razón de que dentro del derecho administrativo sancionador rigen *mutatis mutandi* los principios del *ius puniendi*. Para afirmar lo anterior, toma en cuenta que la facultad de reprimir conductas consideradas ilícitas, que vulneran el orden jurídico, es connatural a la organización del Estado, al cual el Constituyente originario le encomendó la realización de todas las actividades necesarias para lograr el bienestar común, con las limitaciones correspondientes, entre las cuales destacan el respeto irrestricto a los derechos humanos y las normas fundamentales con las que se construye el Estado de Derecho. De acuerdo con los valores que se protegen, la variedad de las conductas y de los entes que pueden llegar a cometer la conducta sancionada, ha establecido dos regímenes distintos, en los que se pretende englobar la mayoría de las conductas ilícitas, y que son: el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. Esta división tiene su razón de ser en la naturaleza de los ilícitos que se pretenden sancionar y reprimir, pues el derecho penal tutela aquellos

bienes jurídicos que el legislador ha considerado como de mayor trascendencia e importancia por constituir una agresión directa contra los valores de mayor envergadura del individuo y del Estado que son fundamentales para su existencia; en tanto que con la tipificación y sanción de las infracciones administrativas se propende generalmente a la tutela de intereses generados en el ámbito social, y tienen por finalidad hacer posible que la autoridad administrativa lleve a cabo su función, aunque coinciden, fundamentalmente, en que ambos tienen por finalidad alcanzar y preservar el bien común y la paz social. El poder punitivo del Estado, ya sea en el campo del derecho penal o en el del derecho administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa la prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor individual, o general, dirigida a toda la comunidad, esto es, reprimir el injusto (considerado en sentido amplio) para disuadir y evitar su proliferación y comisión futura. Por esto es válido sostener que los principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo preventivo, son aplicables al derecho administrativo sancionador, como manifestación del *ius puniendi*. Todo lo anterior lleva a concluir: a) si no hay delito no debe haber sanción en aplicación del principio *nullum poena sine lege* y de *in dubio pro reo*,

ya que en el caso la autoridad controladora no demuestra la intención de faltar a la verdad y, en cambio, sí acreditó y explicó con simples operaciones aritméticas el error en que incurrió en las operaciones efectuadas en la declaración patrimonial.

5. Finalmente, aduce que en cuanto a las pruebas que aportó, en el dictamen se menciona que: *“no se justifica la falta de veracidad en que incurrió ya que dicha información debió, en su caso, asentarse en los rubros: 15 APLICACIÓN DE RECURSOS DEL DECLARANTE, CÓNYUGE Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS DURANTE EL 2000, en el renglón de PAGO DE GRAVÁMENES O ADEUDOS (foja 73); 24 TARJETAS DE CRÉDITO UTILIZADAS DURANTE EL PERIODO MANIFESTADOS POR EL DECLARANTE, CÓNYUGE Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS (foja 77), o bien 25 OBSERVACIONES (foja 78), sin que del análisis a lo declarado en esos rubros se advierta algo al respecto, razones por las que se considera que con su solo dicho no justifica la falta de veracidad.”* Señala que en el desahogo de la vista que se le dio por la entonces Contraloría fue clara su manifestación de que en ningún momento se condujo con falsedad, sino que únicamente hubo imprecisiones y errores de su parte de declarar duplicidad en gastos, por lo que

acepta su error en los asientos, además de que ¿cómo podría probar una situación diversa a la asentada en la declaración si está reconociendo que se equivocó en el llenado? Y las documentales que exhibió fueron con el fin de demostrar el origen de los estímulos económicos “bonos” que recibió por la cumplida y responsable actuación que ha tenido como servidor público.

Concluye solicitando que se tomen en cuenta las manifestaciones formuladas, así como la circunstancia de que si año con año, desde 1996, ha recibido estímulos económicos por parte de sus superiores, se debe a su comportamiento responsable, honesto, profesional y de entrega absoluta a la institución, ya que ha estado bajo las órdenes de diversos titulares de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis y de todos ha tenido la oportunidad de recibir reconocimiento a través de la entrega de estímulos económicos por su actuación, lo que habla de una conducta ejemplar de su parte, que no puede ser empañada por un error involuntario cometido en el llenado de su declaración patrimonial.

Lo manifestado por ***** resulta ineficaz para concluir que no es responsable de la infracción

que se le atribuye y por ende, para relevarle de la imposición de alguna sanción, como a continuación se verá.

En primer lugar, es pertinente destacar que contrario a lo que asegura, en términos de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, las facultades para sancionarlo por la conducta que se le atribuye no han prescrito.

En efecto, en el mencionado artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se ordena:

“ARTÍCULO 78. Las facultades del superior jerárquico y de la Secretaría para imponer las sanciones que esta ley prevé se sujetarán a lo siguiente:

I. Prescribirán en un año si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede de diez veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, y

II. En los demás casos prescribirán en tres años.

El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter continuo.

En todos los casos la prescripción a que alude este precepto se interrumpirá al iniciarse el procedimiento administrativo previsto por el artículo 64...”

Del contenido del precepto transcrito y considerando la finalidad del sistema que rige la sanción de las responsabilidades administrativas en las que incurran los servidores públicos, se advierte que éste se rige por el principio consistente en que ante una mayor gravedad en la infracción, el plazo para que opere la prescripción será mayor.

En efecto, en el artículo 113 constitucional se dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar

la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los

particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.”

De lo dispuesto en el artículo transcrito se desprende que en materia de responsabilidades administrativas será en las leyes secundarias en las que se establecerán las obligaciones de los servidores públicos (con el propósito de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones), entre otros aspectos, así como las sanciones aplicables, en las que prevendrán además, las relativas a la infracción, destitución e inhabilitación, así como aquéllas de índole económica que se establecerán de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el infractor y los daños y perjuicios patrimoniales causados, de donde se sigue que mientras mayor sea la afectación que una falta administrativa genera al Estado, mayor deberá ser la sanción.

En ese contexto constitucional, si el legislador estableció dos plazos de prescripción de las facultades para sancionar a los servidores públicos que cometan una falta administrativa, señalando un

plazo mayor cuando la falta conlleve una mayor afectación patrimonial para el Estado, igual o superior a la cantidad de diez veces el salario mínimo mensual, debe estimarse que dentro de la fracción II del propio numeral se ubican las atribuciones disciplinarias relacionadas con faltas que no impliquen una afectación patrimonial al Estado, dado que, por lo regular, esas faltas administrativas impactan en el ejercicio de la función pública y en los principios que deben regirla en mayor proporción que las faltas que implican un daño patrimonial de cuantía reducida, como lo es para el patrimonio del Estado, el establecido en la fracción I del numeral en comento.

De ahí que tratándose de infracciones que no sean de contenido patrimonial, como en el presente caso, la falta de veracidad en la declaración de situación patrimonial, el plazo para la prescripción será de tres años.

La conclusión que antecede encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia cuyo rubro, texto y datos de identificación se transcriben a continuación:

***“RESPONSABILIDADES DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS. EL PLAZO
DE PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD
SANCIONADORA CON RELACIÓN A***

LAS CONDUCTAS NO ESTIMABLES EN DINERO, ES EL INDICADO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMAS PUBLICADAS EL 21 DE JULIO DE 1992 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN). El artículo 78, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1982, establecía que "las facultades del superior jerárquico y de la Secretaría para imponer las sanciones que esta ley prevé se sujetarán a lo siguiente: I. Prescribirán en tres meses si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede de diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, o si la responsabilidad no fuese estimable en dinero...". Ahora bien, al reformarse la mencionada ley mediante Decreto publicado en el citado órgano de difusión oficial el 21 de julio de 1992, el legislador derogó la referencia expresa que se hacía a la responsabilidad no estimable en dinero, y en la exposición de motivos de la iniciativa correspondiente precisó que ello obedecía a que hay conductas que sin tener repercusiones económicas pueden ser constitutivas de actos u omisiones graves. En consecuencia, la anterior derogación no significa que en los casos señalados la facultad sancionadora haya quedado sin plazo de prescripción para su ejercicio, sino que en la frase "en los demás casos" contenida en la fracción II del precepto legal referido quedan incluidas aquellas conductas no previstas en la fracción I, como sucede con las no estimables en

dinero, resultando que la facultad para sancionarla prescribe en tres años de conformidad con aquella fracción, sobre todo que la redacción de las fracciones I y II del artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no deja margen de discrecionalidad a las autoridades sancionadoras para decidir el plazo de prescripción correspondiente, pues su regulación debe considerarse estricta, por lo que si la conducta infractora genera un impacto económico menor a diez veces el salario mínimo mensual vigente, la posibilidad de sancionarla prescribe en un año, de acuerdo con la primera de las fracciones señaladas; en cambio, conforme a la segunda, si la conducta produce un daño o beneficio mayor a esas diez veces de salario o no es cuantificable en dinero la facultad para sancionarla prescribe en tres años.”

(Novena Época; Segunda Sala; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; tomo: XX, diciembre de 2004; tesis: 2a./J. 186/2004; página: 544).

En las relatadas condiciones, si ***** incurrió en la falta que se le atribuye, el treinta de mayo de dos mil uno, fecha en la que presentó su declaración de situación patrimonial relativa al año dos mil; el plazo para la prescripción comenzó a correr a partir del día siguiente, es decir, el treinta y uno de mayo de ese mismo año, para concluir tres años después, esto

es, el treinta y uno de mayo de dos mil cuatro; sin embargo, en esa fecha ya había iniciado el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente que interrumpió la prescripción, en tanto que fue el diecinueve de febrero de dos mil cuatro cuando se le notificó el inicio de dicho procedimiento, con lo que se interrumpió el mencionado plazo de prescripción.

Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia 2ª.J/203/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de identificación son los siguientes:

**“RESPONSABILIDADES DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS. UNA VEZ
INTERRUMPIDO EL PLAZO PARA QUE
OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS
FACULTADES SANCIONADORAS DE
LA AUTORIDAD, EL CÓMPUTO SE
INICIA NUEVAMENTE A PARTIR DE
QUE SURTE EFECTOS LA
NOTIFICACIÓN DE LA CITACIÓN
PARA LA AUDIENCIA DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.**

De los artículos 78 y 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se concluye que el único acto que interrumpe el plazo de la prescripción de las facultades sancionadoras de la autoridad es el inicio del procedimiento administrativo, no las actuaciones siguientes, y que una vez interrumpido

aquél debe computarse de nueva cuenta a partir del día siguiente al en que tuvo lugar dicha interrupción con conocimiento del servidor público, lo que acontece con la citación que se le hace para la audiencia, aun cuando en el mencionado artículo 78 no se establece expresamente, puesto que del análisis de las etapas que conforman tal procedimiento se advierte que en caso de que la autoridad sancionadora no cuente con elementos suficientes para resolver, o bien, advierta algunos que impliquen nueva responsabilidad administrativa, podrá disponer la práctica de investigaciones, citándose para otra u otras audiencias, lo que produciría que el procedimiento se prolongue, sin plazo fijo, a criterio de la autoridad sancionadora. Esto es, al ser la prescripción una forma de extinción de las facultades de la autoridad administrativa para sancionar a los servidores públicos que realizaron conductas ilícitas, por virtud del paso del tiempo, la interrupción producida al iniciarse el procedimiento sancionador mediante la citación a audiencia del servidor público deja sin efectos el tiempo transcurrido, a pesar de no disponerlo expresamente el artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que fue la misma autoridad sancionadora la que lo interrumpió al pretender probar la conducta ilícita del servidor público y ser de su conocimiento el procedimiento sancionador que debe agotar a efecto de imponerle una sanción administrativa, evitándose con ello el manejo arbitrario de la mencionada interrupción en

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 29/2003.**

perjuicio de la dignidad y honorabilidad de un servidor público. En consecuencia, la única actividad procedimental que ofrece certeza en el desenvolvimiento del procedimiento sancionador sin que exista el riesgo de su prolongación indefinida, es la citación para audiencia hecha al servidor público, con que se inicia dicho procedimiento, por lo que a partir de que surte efectos la notificación de la mencionada citación inicia nuevamente el cómputo del plazo de la prescripción interrumpida, sobre todo considerando que si la referencia al inicio del procedimiento sirvió para determinar el momento de interrupción del plazo de prescripción, aquélla puede ser utilizada para establecer el momento a partir del cual se vuelve a computar el citado plazo, sin que esto deje en estado de indefensión a la autoridad sancionadora, toda vez que antes de iniciar el procedimiento sancionador tuvo tiempo para realizar investigaciones y recabar elementos probatorios.”

(Novena época; Segunda Sala; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; tomo: XXI, enero de 2005; tesis: 2a./J. 203/2004; página: 596).

Así las cosas, no es fundado lo que aduce
***** en esta parte de sus defensas.

En abono a lo anterior, tratándose del procedimiento previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación debe estimarse que si el plazo de la prescripción se interrumpió el diecinueve

de febrero de dos mil cuatro, a la fecha en que se emite la resolución que pone fin a este procedimiento tampoco han transcurrido tres años contados a partir de la última fecha señalada.

Por otra parte, lo que manifiesta *****, en segundo lugar, con el propósito de demostrar que no es responsable de la infracción que se le atribuye es inatendible, pues aun cuando asegura que incurrió en imprecisiones involuntarias y que duplicó gastos al haber realizado pagos con tarjetas de créditos, lo cierto es que aun cuando se tratara de errores, ello no deja de implicar la actualización de la respectiva causa de responsabilidad, pues por el puesto que ocupa se presume que cuenta con los atributos necesarios para desarrollar debidamente la referida declaración de situación patrimonial.

Además, sus afirmaciones en cuanto a que la aclaración que hizo y la aceptación del error en que incurrió ante la entonces Contraloría de este Alto Tribunal, revierten en esta última la carga de demostrar que pretendió faltar a la verdad, resultan inoperantes porque con independencia de que haya tenido la intención de faltar a la verdad o no, lo cierto es que la falta prevista en la fracción XVIII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los

Servidores Públicos se actualiza por el simple hecho de no presentar con veracidad una declaración de situación patrimonial, sin que el hecho de que haya mediado error, tratándose de un servidor público en pleno goce de sus facultades, como causa de la falta de veracidad dé lugar a estimar la inexistencia de responsabilidad en la comisión de la falta respectiva.

En efecto, en la fracción XVIII del mencionado artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se establece que es obligación de los servidores públicos “*presentar con oportunidad y veracidad, las declaraciones de situación patrimonial ...*” Por consiguiente, el hecho de no declarar con veracidad es el que constituye la falta administrativa, sin que tal circunstancia se modifique porque hubieran mediado imprecisiones involuntarias o errores, pues la ley en este aspecto es clara y no exige que se trate de una conducta desplegada de manera voluntaria e intencional, sin menoscabo de que tales aspectos puedan considerarse al individualizar la sanción aplicable.

Además, de especial relevancia resulta señalar que ello no implica dejar de analizar la responsabilidad del servidor público en la comisión de la falta, ya que la misma entendida como la

posibilidad jurídica de imputar a un sujeto la comisión de la falta respectiva considerando su posición fáctica respecto de los hechos que la generaron debe valorarse considerando la situación particular en la que se ubica el servidor público en relación con la conducta cuyo cumplimiento exige la ley, lo que tratándose de la falta de veracidad en una declaración patrimonial está determinado por la situación en que aquél se encuentra al momento de realizar el llenado de ésta, así como por los factores externos que pudieran influir en su conducta.

En ese orden de ideas, el simple hecho de que el servidor público manifieste que no tuvo intención en la comisión de la falta no acredita la ausencia de responsabilidad, ya que para demostrar la ausencia de ésta, debió comprobar que existían determinadas circunstancias que afectaban su capacidad para cumplir con la respectiva obligación administrativa.

Por otra parte, en relación con lo que asegura en cuanto a que no hubo dolo en su conducta ni tuvo el ánimo de mentir, estos argumentos, si bien pueden ser tomados en cuenta al momento de determinar la sanción que corresponda, como se señaló en párrafos anteriores, no son suficientes para demostrar que no es responsable de la infracción que se le atribuye; y,

el hecho de que no maneje bienes ni recursos, ni intervenga en licitaciones, ni haga nombramientos de funcionarios, tampoco prueba que no hubiera incurrido en la falta que dio lugar al inicio del procedimiento de que se trata.

Por otro lado, en cuanto a los argumentos que vierte ***** en tercer término, es menester señalar que, contrario a lo que asegura, en la propia declaración de modificación patrimonial relativa al año dos mil, se señaló aquello que era obligatorio declarar, tan es así, que él mismo reconoce que lo declaró aunque de manera equivocada. En cuanto a lo que aduce en relación con la inconstitucionalidad del artículo 80 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos es necesario destacar que no es ésta la instancia adecuada para hacer valer dicho argumento, además de que no es correcto señalar que la Ley de Responsabilidades antes mencionada no establece el periodo por el que puede aplicarse la sanción de suspensión, pues en la fracción I de su artículo 56 se establece: ***El apercibimiento, la amonestación y la suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo no menor a tres días ni mayor a tres meses***, lo que implica que se encuentra previsto un

plazo mínimo y uno máximo entre los que puede oscilar la sanción correspondiente.

Lo que aduce en cuarto lugar, en el sentido de que se propone aplicar una sanción que no existe, tampoco es idóneo para demostrar que no incurrió en responsabilidad al no haber declarado con verdad en su declaración de modificación de situación patrimonial, relativa al año dos mil.

A mayor abundamiento, el hecho de que en el artículo 80 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se establezca que *“cuando un servidor público faltare a la verdad en relación con lo que es obligatorio manifestar, será suspendido”* no representa ningún grado de inseguridad jurídica pues, como ya se estableció, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos sí señala un plazo máximo y uno mínimo entre los que puede oscilar la sanción de suspensión; además, cabe destacar que la entonces Contraloría de este Alto Tribunal propone el mínimo previsto para el efecto, es decir, una suspensión por tres días.

Por último, lo que manifiesta en relación con las pruebas que exhibió tampoco le releva de la responsabilidad que se le atribuye, pues pese a que

de manera reiterada asegura que no se condujo con falsedad, también es cierto que en todo momento reconoce que sí cometió errores en el llenado de su declaración, lo que lleva a concluir, de manera necesaria, que no declaró con verdad, y es precisamente esa conducta la que constituye la falta administrativa que se le imputa, sin que los referidos errores se hayan justificado por las especiales circunstancias que podían haber afectado su capacidad.

Por tanto, en virtud de que las defensas de ***** no son suficientes para demostrar que no es responsable de la infracción que se le atribuye, es posible concluir que es responsable por no haber cumplido con su obligación de declarar con verdad lo que le era obligatorio manifestar en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y, por consiguiente, debe declararse fundado el procedimiento de responsabilidad administrativa instruido en su contra.

SÉPTIMO. Como se acreditó que ***** es responsable de no haber cumplido con la obligación prevista en los artículos 47, fracción XVIII, y 80 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente en la época en que rindió su

declaración de modificación patrimonial relativa al año dos mil, debe determinarse la sanción que se le ha de imponer atendiendo a que si, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las sanciones condignas a la comisión de una falta administrativa deben aplicarse retroactivamente cuando la norma posterior sea benéfica al servidor público, por mayoría de razón deben aplicarse retroactivamente las nuevas reglas de individualización de la sanción que generan un beneficio al servidor público infractor.

Al respecto es aplicable, en lo conducente, la tesis jurisprudencial, cuyo rubro, texto y datos de identificación son los siguientes:

“MULTAS FISCALES. DEBEN APLICARSE EN FORMA RETROACTIVA LAS NORMAS QUE RESULTEN BENÉFICAS AL PARTICULAR. Si la imposición de las sanciones (penales o fiscales) tiene como finalidad mantener el orden público a través del castigo que, en mayor o menor grado, impone el Estado al que incurre en una infracción, debe considerarse que las multas fiscales tienen una naturaleza similar a las sanciones penales y, por tanto, la aplicación en forma retroactiva de las normas que beneficieren al particular, se apegan a lo dispuesto por el artículo 14 constitucional y al principio de retroactividad en materia penal aceptado por la jurisprudencia, la ley y la

doctrina, en tanto que, por tratarse de castigos que el Estado impone, debe procurarse la mayor equidad en su imposición, en atención a lo dispuesto por el artículo 1o. de la Carta Magna”.

(Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VII, Marzo de 1998. Tesis: 2a./J. 8/98. Página: 333).

En el presente asunto, en principio, para la individualización de la sanción debiera atenderse a lo establecido en el segundo párrafo de la fracción IX del artículo 80 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en el que se ordena:

*“**Artículo 80.** Tienen la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial, ante la autoridad competente, conforme a lo dispuesto por el artículo 79, bajo protesta de decir verdad, en los términos que esta Ley señala:*

IX. (...)

El servidor público que en su declaración de situación patrimonial faltare a la verdad en relación con lo que es obligatorio manifestar en términos de esta Ley, será suspendido, y

*cuando por su importancia lo amerite,
destituido e inhabilitado de tres meses a tres
años...”*

De lo dispuesto en el numeral transcrito, se advierte que en el sistema de individualización vigente al momento de cometerse la infracción materia de este procedimiento bastaba faltar a la verdad en la declaración patrimonial para que el servidor público fuera suspendido.

A pesar de lo anterior, debe tomarse en cuenta que en el artículo 37 de la nueva Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos se ha establecido como criterio de individualización el que la sanción de suspensión en el empleo por faltar a la verdad en una declaración de situación patrimonial es aplicable en el caso de que dicha falta de veracidad haya acontecido deliberadamente.

En dicho numeral se señala:

“Artículo 37. *La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:*

*...El servidor público que en su declaración de situación patrimonial **deliberadamente** faltare*

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 29/2003.**

a la verdad en relación con lo que es obligatorio manifestar en términos de la Ley, previa sustanciación del procedimiento a que se refiere el artículo 21, será suspendido de su empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor de tres meses, y cuando por su importancia lo amerite, destituido e inhabilitado de uno a cinco años, sin perjuicio de que la Secretaría formule la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para los efectos legales procedentes.”

En ese tenor, actualmente no basta incurrir en la referida falta administrativa para hacerse merecedor de una suspensión.

Ante ello, en el caso concreto al resultar benéfico para el servidor público respectivo, debe aplicarse en forma retroactiva este último criterio de individualización.

De tal manera, es necesario precisar qué significado tiene la palabra *deliberadamente*. Para ello se acude a las definiciones que en el Diccionario de la Real Academia Española se establecen de los siguientes vocablos:

“DELIBERADAMENTE. *De manera deliberada.*
DELIBERADO, DA. *Voluntario, intencionado, hecho a propósito.*

DELIBERAR. 1. Considerar atenta y detenidamente el pro y el contra de los motivos de una decisión, antes de adoptarla, y la razón o sin razón de los votos antes de emitirlos.
2. Resolver algo con premeditación.”

Por tanto, la actuación deliberada implica que al cometer la falta administrativa en comento el servidor público tuvo la intención clara e inobjetable de incurrir en la conducta respectiva.

En el caso, no se advierte que ***** haya faltado “deliberadamente” a la verdad al rendir su declaración de modificación patrimonial correspondiente al año dos mil, toda vez que del análisis de las constancias probatorias allegadas al sumario resulta patente que la omisión en que incurrió no la realizó intencionalmente ni buscó ocultar la información, máxime que los errores advertidos de ninguna manera generan indicios sobre algún enriquecimiento inexplicable por parte del servidor público, además de que se estima que si su intención hubiese sido el ocultamiento de información, no hubiera declarado que sus egresos rebasaron a los ingresos obtenidos en el año respectivo y, si bien sobre el monto de estos últimos existió imprecisión, ello se debió a la incertidumbre que le pudo generar

la fecha y términos en los que le fueron pagados dos bonos.

En tal virtud, si la falta cometida por ***** no se realizó deliberadamente, debe concluirse que no se actualiza la regla de individualización prevista en el párrafo penúltimo del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por lo que para fijar la sanción correspondiente es necesario atender a lo dispuesto en los artículos 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como a la fracción II del artículo 45 del citado Acuerdo 9/2005.

En el artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se señala:

***“Artículo 136.** Las faltas serán valoradas y, en su caso sancionadas, de conformidad con los criterios establecidos en los tres últimos párrafos del artículo 53 y los artículos 54 y 55 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.*

En todo caso, se considerarán como faltas graves, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en las fracciones XI a XIII, y XV a XVII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en las fracciones I a VI del artículo 131 de esta ley, y las señaladas en el artículo 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...”

Por su parte, en el artículo 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se ordena:

“Artículo 54. *Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes elementos:*

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley o las que se dicten con base en ella;

II. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público;

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 29/2003.**

III. El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor;

IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;

V. La antigüedad del servicio;

VI. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y

VII. El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de obligaciones.”

El artículo 45 del Acuerdo 9/2005 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es del tenor siguiente:

“Artículo 45. *Las sanciones aplicables a los servidores públicos que incumplan las obligaciones previstas en el artículo 2º. de este acuerdo, consistirán en:*

I. Apercibimiento privado o público;

II. Amonestación privada o pública;

- III. *Sanción económica;*
- IV. *Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor a un año.*
- V. *Destitución del puesto;*
- VI. *Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público; y*
- VII. *Pérdida del respectivo cargo, de las prestaciones y beneficios en términos del párrafo último del artículo 101 constitucional.*

En consecuencia, a continuación se lleva a cabo la individualización de la sanción correspondiente, con base en lo dispuesto en el transcrito artículo 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

I. Por lo que hace al primero de los aspectos referidos, es pertinente destacar que la conducta de ***** es contraria a la obligación señalada en el

artículo 47, fracción XVIII, por lo que incurrió en responsabilidad en términos de lo dispuesto en el artículo 131, fracciones XI y XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; cabe destacar que la responsabilidad en que incurrió el mencionado servidor público no está considerada como grave, de acuerdo con lo que se establece en el numeral 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; además de que la falta administrativa respectiva no se encuentra comprendida en el catálogo de las faltas graves, debe precisarse que por sí misma tampoco resulta de gravedad, toda vez que se advierte que no faltó a la verdad de manera deliberada en el llenado de la declaración de modificación patrimonial y no revela ni genera indicios sobre un enriquecimiento inexplicable por parte del servidor público correspondiente; por otro lado, debe estimarse que la referida falta administrativa, aun cuando no se realizó deliberadamente, sí implica un defecto en el cumplimiento de una obligación legal y, por ende, debe sancionarse con el fin de evitar prácticas de esta naturaleza.

II. Por lo que atañe al segundo punto, relativo a las circunstancias socioeconómicas de *****, a la fecha de comisión de la infracción analizada, cabe destacar que según sus declaraciones de situación

patrimonial, en el año dos mil *****, sus ingresos eran los de coordinador de asesores SPS-34, es decir, en ese año sus ingresos ascendieron a *****.

III. En lo atinente al tercer elemento, es menester señalar que del expediente personal que se lleva en la Dirección General de Desarrollo Humano se advierte que ***** ingresó a laborar en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el primero de septiembre de mil novecientos noventa y uno, es decir, que tiene una antigüedad de catorce años; que ingresó como jefe de departamento (nivel medio) y que de entonces a la fecha en que cometió la infracción se hizo acreedor a diversos ascensos que lo llevaron a ocupar el cargo de coordinador de asesores SPS-34 al momento de cometerla, lo que indudablemente hace patente su buen desempeño laboral en este Alto Tribunal.

En relación con los antecedentes del infractor a los que se refiere la fracción III del artículo 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, es importante considerar, inclusive, cuál ha sido la conducta procesal observada por el servidor público durante el desarrollo de este procedimiento. Al

respecto, resulta aplicable la tesis cuyos rubro, texto y datos de identificación son los siguientes:

“CONDUCTA PROCESAL DE LAS PARTES. *La conducta procesal de las partes es un dato objetivo de convicción para el juzgador, que debe tomarse en cuenta, sin que por ello se violen las garantías individuales.”*

(Sexta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Apéndice 2000. Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Tesis: 111. Página: 88).

Del análisis de las constancias de autos se desprende que ***** rindió el informe correspondiente ante la entonces Contraloría de este Alto Tribunal; y, posteriormente, presentó un escrito ante la entonces Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo valer las defensas que estimó pertinentes y, además, ofreció pruebas relacionadas con su defensa. Lo anterior es muestra del interés del servidor en el desarrollo del procedimiento e, incluso, en la resolución que en éste pueda llegar a emitirse.

IV. Por lo que se refiere al cuarto aspecto, relativo a las condiciones exteriores y los medios de ejecución, deberá atenderse al bien jurídico

salvaguardado, así como a las repercusiones en la vida social que emanan de su lesión o amenaza y la importancia y necesidad de que permanezcan incólumes y, por otra parte, a las circunstancias que rodearon la comisión de la falta así como los medios empleados para ejecutarla.

De tal suerte, debe precisarse que el bien jurídico que tutela la obligación de presentar verazmente las declaraciones de situación patrimonial, primordialmente se refiere a la necesidad de que se cuente con elementos fehacientes para verificar que los servidores públicos se conduzcan con la honradez que debe caracterizarlos, los cuales no deben mostrar signo alguno de enriquecimiento obtenido en el desempeño de sus funciones, que se aparte de los emolumentos devengados por la prestación de sus servicios u otras fuentes lícitas de recursos que les asistan, y su lesión o amenaza reviste gran trascendencia para la vida social, pues generan desconfianza en las instituciones de servicio público.

En el caso, ***** faltó a su obligación de declarar con veracidad en su declaración de modificación de situación patrimonial relativa al año dos mil, por lo que no se ciñó al marco legal aplicable;

sin embargo, como ha quedado precisado con anterioridad, del contenido de la declaración respectiva no se advierten indicios sobre un enriquecimiento inexplicable de su parte; asimismo, es menester atender a que la complejidad que reviste el llenado de los formatos correspondientes pudiera dar lugar a la comisión de un yerro como el que se analiza, no obstante ello, resulta importante evitar la afectación al bien jurídico que salvaguarda el debido llenado de las declaraciones de situación patrimonial.

Asimismo, en cuanto a las circunstancias que rodearon la comisión de la falta así como los medios empleados para ejecutarla, debe precisarse que de autos se advierte que el mencionado servidor público declaró egresos mayores, sin embargo, ello se debió a un error que no hace patente que su intención hubiera sido la de ocultar alguno de sus bienes.

V. En lo concerniente al quinto punto, se reitera que ***** tiene una antigüedad de catorce años, pues ingresó a laborar en este Alto Tribunal el primero de septiembre de mil novecientos noventa y uno y continúa laborando hasta la fecha.

VI. Por lo que respecta al sexto punto, se hace hincapié en que del expediente personal de *****

se advierte que **no ha sido sancionado con motivo de alguna falta administrativa** y que, incluso, ha sido promovido en diversas ocasiones lo que es revelador de su buen desempeño laboral, de ahí que no se actualice el supuesto de la reincidencia.

VII. Finalmente, por lo que hace al punto séptimo de la disposición en comento, es preciso puntualizar que no existe en el caso constancia alguna de la que se desprenda que, a consecuencia de la presente falta, ***** hubiese obtenido algún beneficio, lucro u ocasionado daño o perjuicio económico.

En este orden de ideas, para la imposición de la sanción respectiva, se toma en cuenta, en síntesis, que la falta en que incurrió ***** no está catalogada como grave; que explicó las razones por las que faltó a la verdad al rendir su declaración de modificación patrimonial y si bien no fueron suficientes para relevarlo de responsabilidad administrativa, sí resultan atenuantes a su favor; que durante los catorce años en que se ha desempeñado dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no sólo no había sido sancionado con motivo de la comisión de alguna infracción administrativa, sino que nunca había estado sujeto a un procedimiento de esta

naturaleza; y que, con motivo de tal infracción administrativa, no obtuvo beneficio o lucro, ni provocó daño o perjuicio.

Tomando en consideración todos los aspectos que han quedado descritos, se impone como sanción a ***** una amonestación privada, ya que aun cuando constituye una sanción de poca entidad, es superior a la más leve, es decir, al apercibimiento. Lo anterior es así, dado que debe desincentivarse en forma categórica la conducta consistente en declarar incorrectamente, ya que a pesar de que no se incurra en la falta de veracidad al momento de realizar la declaración de situación patrimonial de manera deliberada, el incurrir en dicha falta sí es revelador de falta de atención en el cumplimiento de las obligaciones administrativas.

En mérito de lo expuesto, en uso de las facultades que me confieren los artículos 14, fracción XXI, y 133, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y tomando en consideración los elementos a que hace referencia el artículo 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se llega a la conclusión de que ha lugar a imponer como sanción a *****, la consistente en **una amonestación privada**, la que

habrá de ejecutarse por conducto de la Secretaría Ejecutiva de la Contraloría de este Alto Tribunal, previa cita al servidor público respectivo en la sede de la misma.

Asimismo, deberá remitirse copia del presente fallo a la Dirección General de Personal, a efecto de que sea agregada al expediente personal de *****; así como a la Contraloría del Poder Judicial de la Federación a fin de que la integre en el registro de servidores públicos sancionados.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO. Conforme a lo expuesto en el considerando sexto de la presente resolución, ***** incurrió en la falta administrativa materia de este procedimiento de responsabilidad administrativa.

SEGUNDO. Se sanciona a ***** con una amonestación privada que habrá de ejecutarse en los términos expresados en la parte final del último considerando de este fallo.

Devuélvase el expediente a la Secretaría Ejecutiva de la Contraloría de este Alto Tribunal, a efecto de que notifique personalmente esta

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 29/2003.**

determinación al servidor público sujeto al procedimiento y, en su oportunidad, lo archive como totalmente concluido.

Así lo resolvió el señor Ministro Mariano Azuela Güitrón, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esta hoja corresponde a la resolución dictada por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señor Ministro Mariano Azuela Güitrón, el día siete de octubre de dos mil cinco, en el procedimiento de responsabilidad administrativa 29/2003, seguido en contra de *****.